

Imprimir

Hablemos de Medellín y lo que está en juego allí en las próximas elecciones regionales. No es solo la Alcaldía, sino la continuidad y consolidación de un poder económico que no puede permitirse perder de nuevo esa administración.

El GEA o Sindicato Antioqueño es un grupo económico muy poderoso que por décadas se ha apoderado del control de empresas públicas y privadas mediante la captura del poder político de la región. Ha logrado llevar a cabo una articulación entre el capital privado y la administración pública que tiene por función mantener una estructura de poder que asegure su dominio sobre la propiedad y la riqueza de la ciudad. Esa alianza público-privada entre la Alcaldía y sus empresas se ha visto truncada por el mandato de Daniel Quintero, que le ha declarado la guerra a los “cacaos” antioqueños.

Esa alianza público-privada no se limita a lo económico. En lo que atañe a la seguridad, Medellín ha vivido episodios de gobernabilidad ilegal como método alternativo de cuidado y protección a través de la violencia organizada de grupos criminales, que en connivencia con fuerzas legales de seguridad han actuado sobre amplios sectores del Valle de Aburrá para disminuir las tasas de homicidio y crear un ambiente artificial de estabilidad política y social. La “Don-Bernalidad” y el “Pacto de fusiles” hacen parte de la historia de este tipo de contubernios.

Un personaje como Gustavo Villegas capturado el 4 de julio de 2017 por sus nexos con la Oficina de Envigado, no fue una figura irrelevante dentro del poder local en Medellín, pues estuvo inmerso en administraciones sucesivas ocupando importantes cargos desde hace 32 años. Entre 2006 y 2007, Sergio Fajardo designó a Gustavo Villegas como alcalde encargado de Medellín en 7 oportunidades. Ya en 2004 lo había nombrado director del Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía, el cual estaba encargado de atender a los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. También fue secretario de Hacienda en la alcaldía del condenado parapolítico Luis Alfredo Ramos (1992-1995); y director de los Juegos Deportivos Suramericanos durante el mandato de Alonso Salazar (2008-2012), hasta que llegó por fin a la alcaldía de Federico Gutiérrez (2016-2020) para ser su secretario de Seguridad. Desde 2008 ya había señalamientos y

denuncias en contra del secretario estrella de Gutiérrez por su estrecha relación con las mafias de la ciudad. ¿De dónde obtuvo su poder y por qué pasó inadvertido tanto tiempo para las elites que lo apoyaron y con las que cogobernó?

En lo que respecta al modelo político-económico que gobierna a Medellín, se han oído elogios de personas como el profesor Francis Fukuyama, quien, naturalmente equivocado, defendió el fin de las ideologías. Pero defiende una: el paradigma de la “gobernanza”. Este modelo de administración pública es entendido como la acción coordinada de sectores públicos y privados que gestionan sus asuntos en común. El modelo neoliberal de gobernanza, alentado por el principio de la competencia, apela a la gerencia como garantía de eficiencia en la administración, y termina convertido en un ejercicio de control que particulares poderosos ejercen sobre los poderes públicos, y de cooptación del poder político por el capital privado. Esto implica un tipo de poder que obliga al Estado a aceptar múltiples concesiones de autoridad a las empresas privadas. La empresa es aquí el fundamento de la organización política basada en la gobernanza, pues tiene como meta hacer que las entidades privadas de bienes y servicios produzcan más eficazmente en alianza con el sector público. Por eso es que Medellín no ha tenido alcaldes sino tan solo subordinados muy sumisos que fungen de gerentes y administradores para dirigir los negocios de vigorosos grupos económicos dentro de la ciudad. “Esta co-gobernanza privada-pública de la política económica ha llevado a la producción de medidas y dispositivos en materia fiscal y reglamentaria sistemáticamente favorables a los grandes grupos oligopólicos” (Laval y Dardot, 2013).

El GEA, con su buena conciencia moral, justifica su existencia afirmando el carácter “consciente” y “social” del capitalismo que practica. Su modelo, dice, ha contribuido a la generación de empleo y ha impulsado al desarrollo de Medellín y la región, jalonando una economía productiva orientada a mejorar la calidad de vida y la seguridad de los antioqueños. El suyo es un capitalismo “filantrópico” opuesto al capitalismo perverso e inconsciente que solo piensa en acumular. Han cometido “errores”, claro, como promover la cartelización y acceder a tierras que fueron objeto de despojo, pero estos son solo pecados que no manchan su accionar “virtuoso”. Argos se aprovechó de una situación de desplazamiento forzado que obligó a pequeños propietarios campesinos a vender sus predios

a una sociedad suya llamada Tekia S. A. Por su parte, el Tribunal de Restitución de Tierras ordenó en 2019 la restitución de tales predios a los campesinos despojados. Con su fórmula corporativa el GEA se ha aprovechado de empresas públicas como EPM para satisfacer sus propios intereses.

La elites federalistas antioqueñas no se pueden dar el lujo de dejar abierta la menor posibilidad de perder esta vez las elecciones. Harán todo cuanto pueden por recuperar a Medellín para que fluyan sus negocios. Por eso Federico Gutiérrez es el candidato predilecto de los grupos económicos más poderosos de provincia que esperan ansiosos un respiro en sus finanzas. El diario *El colombiano*, pasquín retrógrado de la godarria antioqueña, celebra anticipadamente la elección de “Fico”: un candidato ignorante, burdo y callejero, un “bacán”, un hombre rústico sin ideas complejas que puede servir de “enlace” y hacer muy bien la labor de un mandadero. ¡Plata es plata!

David Rico

Foto tomada de: El Colombiano